

Naturaleza pública o privada de los ficheros. Naturaleza de los ficheros de una Cofradía de pescadores. Informe 504/2006

La consulta plantea la naturaleza de los ficheros de la Corporación consultante, atendiendo a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, lo que exige delimitar el criterio que diferencia los ficheros de titularidad pública y los de titularidad privada.

Este criterio ha sido analizado reiteradamente por esta Agencia Española de Protección de Datos. Así, en su informe de 8 de abril de 2003 se indicaba lo siguiente:

“Si bien la Ley Orgánica 15/1999 delimita en su articulado el régimen de los ficheros de titularidad pública y privada, no establece un concepto de los mismos. Por esta razón, la delimitación deberá fundarse en los criterios que determinan la naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada del responsable del fichero.

Esta conclusión se alcanza atendiendo a las peculiaridades establecidas para el régimen de los ficheros de titularidad pública, toda vez que los mismos únicamente podrían ser constituidos en caso de que se desarrollen como consecuencia del ejercicio de una competencia administrativa, tal y como se desprende del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, que permite la cesión entre Administraciones Públicas cuando la misma se funde en el ejercicio de unas mismas competencias. En este mismo sentido, el artículo 20 de la Ley exige que los ficheros se encuentren sometidos a la tutela de una Administración con potestad para dictar la correspondiente Disposición de carácter general de creación del fichero.

Por tanto, considera esta Agencia de Protección de Datos que la delimitación del régimen aplicable a los ficheros de titularidad pública y privada deberá fundarse en un doble criterio: por una parte el responsable del fichero deberá ser una Administración Pública y por otra, en los supuestos que pudieran plantear una mayor complejidad, sería necesario que el fichero sea creado como consecuencia del ejercicio de potestades públicas.

Atendidos estos criterios, sería preciso delimitar el concepto de Administración Pública como responsable de los ficheros de titularidad pública”.

Pues bien, tratándose de una Cofradía de Pescadores, deberá atenderse, como indica la propia consulta, al régimen contenido en la Sección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima.

Así, dispone el artículo 45.1 de la Ley que “las Cofradías de Pescadores son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero”, añadiendo el artículo 45.2 que “las Cofradías de Pescadores gozan de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines”, siendo la pertenencia a las mismas meramente potestativa para “los armadores de buques de pesca y los trabajadores del sector extractivo”.

En cuanto a sus funciones serán, según el artículo 46 las de “actuar como órganos de consulta de las Administraciones públicas competentes y ejercer las funciones que les encomienden la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, “prestar servicios a sus miembros y representar y defender sus intereses” y “Administrar los recursos propios de su patrimonio”.

Como puede deducirse de lo dispuesto en los mencionados preceptos, si bien la Ley 3/2001 no establece el régimen público o privado aplicable a las cofradías, de su texto puede deducirse que aquéllas en ningún caso ejercerán potestades de derecho público.

Consecuencia de lo anterior será que los actos de las cofradías no podrán ser susceptibles de recurso contencioso-administrativo, ni tan siquiera de reclamación previa al ejercicio de acciones civiles o laborales, no gozando sus actos de la ejecutividad reconocida para los actos de la Administración Pública.

En virtud de todo ello, dado que las actividades de las Cofradías de Pescadores, que se describen en el artículo 46 de la Ley 3/2001, no implicaran en modo alguno el ejercicio de potestades administrativas ni de ninguna de las “competencias” a las que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, los ficheros o tratamientos realizados por la entidad consultante deberán en todo caso ser considerados como de titularidad privada, lo que implicará la necesidad de proceder a la notificación del tratamiento en los términos exigidos por el artículo 26 de la Ley Orgánica sin que sea de aplicación a la misma la

exigencia de adopción de una disposición general de creación de sus ficheros, prevista en el artículo 20 del citado texto legal.